

SOLICITANTE: EL SOLICITANTE

RECURSO DE REVISIÓN: CESCJN/REV-76/2018

EXPEDIENTE: UT-A/0242/2018

En la Ciudad de México, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta al Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Presidente, con el oficio UGTSIJ/TAIPDP/2543/2018, mediante el cual, el titular de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, remite el expediente UT-A/0242/2018, formado con motivo de la solicitud de información registrada con el número de folio 0330000127718; el cual contiene glosado el oficio INAI/STP/DGAP/1013/2018, suscrito por la Directora General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través del cual remite el recurso de revisión interpuesto por el C. El Solicitante. Conste.-

Ciudad de México, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho.

Agréguese al expediente UT-A/0242/2018, el oficio UGTSIJ/TAIPDP/2543/2018, mediante el cual, el titular de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, remite el expediente en el que se

actúa, formado con motivo de la solicitud de información registrada con el número de folio 0330000127718; el cual contiene glosado el oficio INAI/STP/DGAP/1013/2018, suscrito por la Directora General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través del cual remite el recurso de revisión interpuesto por el C. El Solicitante.

ANTECEDENTES

I. El peticionario, con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, hizo petición de información mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, tramitada bajo el número de folio 0330000127718, en la que solicitó lo siguiente:

“Por medio del presente, amablemente solicito, de 2014 a la fecha, lo siguiente:

- 1. Conocer si pueden emitir certificados digitales, cuales son los requisitos y en qué documentos o actos de autoridad pueden ser suscritos con firma electrónica.*
- 2. Archivo o documento donde consten las medidas o elementos humanos, económicos, materiales y tecnológicos con que cuentan para la emisión de certificados digitales o la utilización de la firma electrónica por parte de sus servidores y/o funcionarios públicos.*
- 3. Los documentos que los servidores y/o funcionarios públicos hayan suscrito con firma electrónica.*
- 4. Las quejas, denuncias, demandas, juicios o cualquier acto en los que se haya hecho valer la invalidez de la firma electrónica que*

utilizan.

5. *Las demandas de juicio de amparo, de nulidad, de protección de derechos PE, presentadas en contra de los actos administrativos suscritos electrónicamente.*
6. *Las sentencias y/o resoluciones en las que se haya resuelto sobre la validez o invalidez del uso de la firma electrónica por parte de los servidores y/o funcionarios públicos.*
7. *Las demandas de amparo, de nulidad o cualquier otro que esté pendiente de resolver la validez o invalidez de la firma electrónica, como medio de suscripción en los actos de autoridad emitidos.”*

II. Con motivo de la anterior solicitud de información, mediante acuerdo de veintiocho de junio del año en curso, el Subdirector General de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial previno al peticionario a fin de que precisara diversas cuestiones de su solicitud.

Dicha prevención fue desahogada por el solicitante el veintinueve de junio del presente año, en los términos siguientes:

“En cuanto a la pregunta 3, me refiero a todos aquellos documentos que hayan sido suscritos por los servidores públicos y/o funcionarios públicos de la dependencia, con firma electrónica, en ejercicio de sus facultades.

Respecto a los puntos 4, 5, 6 y 7, aún y cuando advierto que fui muy claro, expreso que requiero conocer las resoluciones en las que se impugne la validez de la firma electrónica utilizada por alguno de los servidores públicos y/o funcionarios públicos de esa dependencia, así como aquellas en las que se haya resuelto sobre la validez y/o legalidad de firma electrónica.”

III. Una vez desahogada la prevención, con fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Subdirector General de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, ordenó formar el expediente UT-A/0242/2018; así como girar oficios al Director General de Tecnologías de la Información y al Secretario General de Acuerdos, a fin de que verificaran la disponibilidad de la información y remitieran el informe respectivo.

IV. Con motivo de las respuestas emitidas por los titulares de las áreas requeridas, se emitió el acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, a través del cual el Subdirector General de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, ordenó girar oficio al Secretario del Comité de Transparencia para remitirle el presente expediente, con la finalidad de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

V. Con fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, el Comité de Transparencia emitió resolución en el expediente Varios CT-VT/A-30-2018, en la que se tuvo por atendido el derecho a la información y se confirmó la inexistencia de la información.

VI. A través del oficio INAI/STP/DGAP/1013/2018, con fundamento en el artículo Segundo y Transitorio Primero del Acuerdo ACT-PUB/25/05/2016.07 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales, la Directora General de Atención al Pleno de dicho organismo, remitió a este Alto Tribunal el recurso de revisión interpuesto por el solicitante de información, a través del cual realiza diversas manifestaciones.

COMPETENCIA

Establecidos los antecedentes del caso, se hacen las siguientes consideraciones respecto a la competencia de este Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, se realizaron diversas modificaciones al artículo 6° constitucional, dentro de las cuales destaca la fracción VIII, del apartado “A”, párrafo cuarto, de dicho precepto constitucional, que en lo que interesa, señala lo siguiente:

“VIII. ...

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y **Judicial**, órganos autónomos, partidos

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; **con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros.**”

De lo anterior se desprende que el nuevo régimen constitucional de garantía del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, supone que las controversias suscitadas en el renglón de la información administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán conocidas y resueltas por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quedando sólo reservadas a este Alto Tribunal las del orden jurisdiccional.

A su vez, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su Título Octavo “*De los Procedimientos de Impugnación en Materia de Acceso a la Información Pública*”; y, su Capítulo V, “*Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*”; así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su Título Quinto, “*Del Procedimiento de Acceso a la Información Pública*”; y, su Capítulo IV, “*Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*”, en concordancia con el precepto constitucional anteriormente transcrito, únicamente facultan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer

de los asuntos relacionados con la información de carácter jurisdiccional, entendiéndose como tales, aquellos que estén relacionados con el ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia competencia de este Alto Tribunal, en términos de lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, dentro del marco normativo en materia de transparencia, se establece que la resolución de los recursos de revisión relacionados con solicitudes de acceso a la información en los asuntos jurisdiccionales antes descritos, corresponderá a un Comité integrado por tres Ministros, el cual se denomina Comité Especializado, tal como lo establece el artículo CUARTO, del Acuerdo General de Administración 4/2015, del veintiséis de agosto de dos mil quince, por el que se alinean las estructuras administrativas y funcionales del Alto Tribunal a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Derivado de lo anterior, se emitió el *Acuerdo del Comité Especializado de Ministros relativo a la Sustanciación de los Recursos de Revisión que se Interponen en Contra del Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, en Posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*; el cual, en su artículo Segundo, establece que los recursos de revisión que se interpongan respecto de solicitudes de información pública,

permanecerán en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su debida clasificación (esto es, si su naturaleza es jurisdiccional o administrativa); a su vez el artículo Cuarto señala que cuando el recurso de revisión se estime relacionado con información jurisdiccional, será sustanciado por el Comité Especializado de este Alto Tribunal, en términos del Título Octavo, Capítulo I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en caso de que se considere relacionado con asuntos administrativos, el expediente será remitido al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para su sustanciación.

Ahora bien, una vez realizadas las anteriores consideraciones y con fundamento en lo establecido en los artículos Primero y Segundo del Acuerdo del Comité Especializado antes citado, se procede a realizar la determinación de la información, ya sea jurisdiccional o administrativa, a efecto de determinar qué órgano será el encargado de sustanciar el recurso de revisión que nos ocupa.

En ese sentido, del contenido de la solicitud de información transcrita en el apartado de antecedentes del presente acuerdo, se advierte que la petición tiene el **carácter de administrativa por lo que se refiere a los puntos 1, 2 y 3**, en los cuales se requiere en términos

generales información diversa respecto a certificados digitales y la utilización de firma electrónica en este Alto Tribunal. Asimismo, la solicitud de información fue atendida y respondida por un área estrictamente administrativa de esta Suprema Corte.

Por su parte, **los puntos 4, 5, 6 y 7 de la solicitud tienen el carácter de jurisdiccional** al encuadrar dentro de temas o asuntos relacionados con el ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia competencia de este Alto Tribunal, en términos de lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, tienen relación directa o indirecta con los asuntos que son competencia del Pleno o las Salas de esta Suprema Corte, de conformidad con dicha Ley Orgánica y las leyes aplicables.

En vista de lo anterior, debe hacerse un desglose del presente recurso de revisión, el cual deberá ser sustanciado y resuelto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conforme a su competencia, **únicamente respecto a los agravios identificados como “Segundo”, “Tercero” y “Cuarto”, los cuales van relacionados con los temas planteados en los puntos 1, 2 y 3 de la petición de información, considerados con el carácter de administrativos.**

En virtud de lo anterior, se instruye a la Secretaría de Seguimiento de Comités de Ministros, remitir el expediente UT-A/0242/2018, así como el recurso de revisión ahí contenido, a la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, para que por su conducto, se remita a la brevedad al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo Cuarto del Acuerdo del Comité Especializado de Ministros relativo a la Sustanciación de los Recursos de Revisión que se Interponen en Contra del Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, en Posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otra parte, al considerarse que los puntos 4, 5, 6 y 7 de la solicitud de información tienen el carácter de jurídicos y jurisdiccionales, se determina que el recurso de revisión que nos ocupa deberá ser sustanciado por el Comité Especializado de Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a su competencia, únicamente por lo que respecta al agravio "*Primero*" que se encuentra relacionado con esos numerales.

PROCEDENCIA

Una vez establecidos los antecedentes del caso y fijada la competencia del Comité Especializado para conocer del presente recurso de revisión únicamente por

cuanto se refiere al aspecto jurisdiccional, se procede a realizar el estudio de la procedencia del medio de impugnación que nos ocupa, en los siguientes términos:

En el agravio que únicamente será objeto de revisión por parte de este Comité Especializado en Materia de Transparencia, se expresó lo siguiente:

*“Interpongo recurso de revisión, al considerar que la SCJN no atiende la solicitud presentada conforme a lo requerido, por lo siguiente: **Primero.-** Respecto de los puntos 5, 6 y 7, el **Acta del Comité señala que, “no localizó documentación alguna con dichas particularidades, por lo cual se colige que dicha información es igual a cero, concepto que implica un valor en sí mismo y, por tanto, un elemento que atiende la solicitud de acceso en lo que corresponde a esos puntos...”** Respecto de este punto, quiero indicar que en ningún momento solicité un dato numérico o estadístico, sino los documentos respectivos, en ese sentido, no es aplicable el criterio que se utiliza por el sujeto obligado, más aún, cuando el mismo está sustentado en una ley abrogada. Por ello solicito de ese H. instituto, analice la respuesta que el sujeto obligado proporciona, determine la pertinencia de sustentar la misma en criterios y leyes no vigentes, **instruya a que busquen nuevamente lo solicitado y me entreguen la documentación** petitionada.*

[...]”

Visto el contenido del anterior agravio se desprende que respecto a los puntos 5, 6 y 7 de la solicitud de información, el recurrente se queja esencialmente de que el Comité de Transparencia en su resolución consideró que el sujeto obligado, al no localizar documentación alguna

con las particularidades señaladas por el solicitante, dicha información era igual a cero, y por tanto, se tenía por atendida la solicitud de acceso a la información en lo que corresponde a esos puntos (5, 6 y 7 de la solicitud). Asimismo, en relación a ello el recurrente indicó que en ningún momento solicitó un dato numérico o estadístico, sino los documentos respectivos y en ese sentido no era aplicable el criterio que utilizó el sujeto obligado, afirmando además, que estaba sustentado en una ley abrogada. Finalmente, solicitó que se analizara la respuesta que el sujeto obligado proporcionó y se instruyera una nueva búsqueda de lo solicitado y se le entregara la documentación requerida.

En ese sentido y bajo las manifestaciones señaladas por el recurrente, se desprende que su recurso de revisión encuadraría en principio en las hipótesis previstas en el artículo 143, fracciones IV y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que el inconforme afirmó que no solicitó un dato numérico o estadístico, sino documentos; además, solicitó una nueva búsqueda de la información y que se le entregara la documentación requerida.

Dicho precepto legal y las fracciones mencionadas en lo conducente disponen lo siguiente:

“Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de:

. . .

IV. La entrega de información incompleta.

V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;”

Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa se advierte que el Secretario General de Acuerdos mediante su oficio SGA/FAOT/279/2018, dio respuesta a la solicitud de información proporcionando una tabla elaborada por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, que contiene datos de los asuntos relacionados con el punto 4 de la petición del solicitante; asimismo, señaló que respecto a los puntos 5, 6 y 7 de la solicitud, **no se localizaron asuntos relacionados**. De igual manera, se puso a disposición del solicitante el vínculo de internet correspondiente al sistema de “*Sentencias y Datos de Expedientes*”, a fin de que pudiera consultar las sentencias respectivas.

Asimismo, en relación a la anterior respuesta se observa que el Comité de Transparencia emitió resolución en el expediente Varios CT-VT/A-30-2018, en la cual hace mención que el área requerida (Secretaría General de Acuerdos), respecto a lo solicitado en el numeral 4, remitió una tabla que contiene datos de los asuntos referidos por el requirente, en específico: tipo de asunto, número de expediente, acto reclamado, tema planteado, Ministro ponente, sentido de la resolución y órgano de radicación, ya sea el Pleno, Primera o Segunda Sala.

De igual manera, por lo que se refiere a la información requerida en los numerales 5, 6 y 7 de la solicitud, dicho Comité señaló que la Secretaría General de Acuerdos expresó que no había localizado documentación alguna con dichas particularidades, por lo que dicha información era igual a cero, concepto que implica un valor en sí mismo y por tanto, un elemento que atiende a la solicitud de acceso en lo que corresponde a esos puntos. Así bajo ese contexto, el citado órgano colegiado estimó que se encontraba atendido el derecho de acceso a la información del peticionario en lo que correspondía a esos datos.

De todo ello se advierte que la petición de información fue atendida de manera completa por parte de la Secretaría General de Acuerdos respecto a los punto 4, 5, 6 y 7 de la solicitud de información; **y, al respecto, se considera pertinente hacer la aclaración que la respuesta emitida por dicha área en el sentido de que no localizó asuntos relacionados con los temas referidos en los numerales 5, 6 y 7, debe considerarse en sí misma como la respuesta a la petición; es decir, es el resultado de la búsqueda realizada en un momento dado, en la cual no se encontró información o documentos que encuadraran dentro de los temas o hipótesis planteadas por el peticionario; por lo tanto, se concluye que no hay motivos de inconformidad que pudieran actualizar una causa de procedencia del recurso de revisión.**

Además es conveniente mencionar que el recurrente al expresar su agravio en el sentido de que en ningún momento solicitó un dato numérico o estadístico, sino solamente los documentos respectivos; con ello no está controvirtiendo la respuesta emitida por la Secretaría General de Acuerdos, ni el señalamiento del Comité de Transparencia en el sentido de que la respuesta del área requerida (SGA) consistente en no haber localizado documentación alguna con dichas particularidades, debía tener por atendida la solicitud de acceso a la información.

De igual manera es pertinente señalar que el recurrente al afirmar que en ningún momento solicitó un dato numérico o estadístico, cayó en una confusión para controvertir la respuesta que le fue emitida, ya que esa idea la obtuvo de la cita al pie de página que realizó el Comité de Transparencia respecto de un criterio del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el cual versa sobre casos en los que se requiera un dato estadístico o numérico; sin embargo, tal referencia al pie de página no fue citada por considerarse que en el caso concreto el peticionario hubiera solicitado datos numéricos o estadísticos; sino únicamente se hizo para abundar sobre la idea plasmada en sus consideraciones respecto a la atención que se dio al derecho de acceso a la información.

Así las cosas y en base a las consideraciones

anteriormente realizadas, se desprende que se actualiza la causa de desechamiento por improcedencia del recurso de revisión prevista en el artículo 155, fracción III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual en lo conducente dispone lo siguiente:

***“Artículo 155.** El recurso será desechado por improcedente cuando:*

. . .

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 143 de la presente ley;”

En virtud de las anteriores consideraciones, al actualizarse una causa de desechamiento por improcedencia del recurso de revisión; con fundamento en el artículo 155, fracción III, en relación con el diverso 143, fracciones IV y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, SE DESECHA EL RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el C. El Solicitante.

Por otra parte y en diverso orden de ideas, no pasa desapercibido que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 150, fracción I, establece que una vez interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del organismo garante lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para decretar su admisión o desechamiento; lo cual, para el caso de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, implicaría que el Ministro Presidente del Comité Especializado lo turnara a un Ministro ponente integrante de dicho órgano colegiado, para esos efectos.

Sin embargo, el último párrafo del artículo 167 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá emitir un Acuerdo para la integración, plazos, términos y procedimientos del Comité referido, de conformidad con los principios, reglas y procedimientos de resolución establecidos en la Ley General y en esa Ley Federal.

Por lo tanto, derivado de la anterior facultad establecida en la ley; y, toda vez que se encuentra en proceso de elaboración el Acuerdo interno de este Alto Tribunal que regule la integración, plazos, términos y procedimientos del Comité Especializado; el Presidente de dicho órgano colegiado en materia de transparencia, emite el presente acuerdo de desechamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, fracción V, del Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el

artículo 6° Constitucional; en relación con el diverso artículo CUARTO, del Acuerdo General de Administración 4/2015, del veintiséis de agosto de dos mil quince, por el que se alinean las estructuras administrativas y funcionales del Alto Tribunal a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Notifíquese el presente acuerdo al solicitante por conducto de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial.

Así lo proveyó y firma el señor Ministro Alberto Pérez Dayán, Presidente del Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Licenciado Alejandro Roldán Olvera, Secretario de Seguimiento de Comités de Ministros, que autoriza y da fe.